



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, siete (07) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Auto Interlocutorio

MAGISTRADA PONENTE: ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES

MEDIO CONTROL:	DE	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:		760001-33-33-010-2017-00332-01
DEMANDANTE:		DORIS STELLA GONZÁLEZ
DEMANDADO:		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
ASUNTO		APELACIÓN DE AUTO EN EL EFECTO DEVOLUTIVO – CONFIRMA AUTO QUE NIEGA PRUEBAS. Devolución digital del expediente al juzgado de origen.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto interlocutorio nro. 112 del 28 de enero de 2020, proferido en audiencia inicial por el Juzgado Décimo Administrativo Oral de Cali, mediante el cual negó el decreto de una prueba solicitada como “informe técnico”.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, la señora Doris Stella González, demandó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, para que se declare responsable por los daños y perjuicios ocasionados al señor Christian Julián Molina Franco (q.e.p.d.) quien había sido privado de la libertad, tenía una patología y falleció estando en libertad condicional.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

El juzgado negó el decreto y práctica de una prueba que la parte demandante rotuló como “informe técnico”¹ con el siguiente argumento:

- La parte demandante solicita se decrete “informe técnico” para que el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y la Secretaría de Salud Departamental Municipal, respondan las siguientes preguntas:
 - a) ¿Por qué el INPEC mantuvo al recluso Christian Julián Molina Franco, en el Centro Carcelario Villa Hermosa de Cali en condiciones deplorables de hacinamiento y en una celda donde tenía que dormir en el suelo?
 - b) ¿Por qué no se le dio al recluso Christian Julián Molina Franco un tratamiento de salud adecuado y especializado, acorde a la enfermedad asmática que este padecía durante su estancia en el centro carcelario mencionado?

¹ Ver folios 10 y 11

- c) ¿Por qué el INPEC no le brindó y sometió al recluso a terapias respiratorias continuas durante la estancia en dicho centro carcelario para atender su enfermedad asmática, ni lo sometió a un control permanente de un neumólogo para tratar su enfermedad asmática y por qué no le suministró medicamentos distintos al post?
 - d) ¿Por qué el INPEC no mantuvo al recluso Christian Julián Molina Franco, durante su estancia en el centro carcelario, en una celda o lugar en condiciones de salubridad adecuada para su salubridad?
 - e) ¿Por qué el INPEC omitió brindarle al recluso un servicio de salud adecuado, oportuno y diligente para tratarle la enfermedad asmática que este padecía y que finalmente le quitó la vida por haber sido mal controlada?
 - f) ¿Por qué el INPEC no adoptó o tomó las medidas de salubridad necesarias con respecto al recluso Christian Julián Molina Franco, a otro centro carcelario donde fuera tratado en mejores condiciones su enfermedad asmática o de otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria para que continuara su tratamiento médico habitual de su enfermedad asmática en su casa?
- Esa prueba no tiene la calidad de informe técnico sino que se busca que las dependencias respondan preguntas a negaciones indefinidas a supuestos de hecho que son materia de debate probatorio²

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

El apoderado judicial apeló la decisión argumentando³:

“Para que reflexione el Despacho con relación a la denegación que hizo con relación a los informes técnicos de oficiar al Ministerio de Salud, a la Superintendencia de Salud y a las Secretarías de Salud Departamental y Municipal, con el fin de que estas entidades rindan un informe técnico sobre los puntos que ya se describieron en el auto recurrido porque considero que contrario a lo que manifestado por el despacho que son negativas o hechos ya supuestos probados la verdad es que simplemente es un cuestionario para las entidades a los cuales se va a oficiar, para que rindan ese informe y determinen si las preguntas o los hechos a los cuales se refieren esas preguntas existieron o no existieron, entonces considero que esa prueba deben ser decretada en los términos solicitados en la demanda”

V. CONSIDERACIONES:

5.1. EXPEDIENTE DIGITAL – SEGUNDA INSTANCIA.

En aplicación del Decreto Legislativo 806 de 2020, el Despacho digitalizó el auto apelado y el acta de reparto, y proferirá esta decisión por medios digitales. Por tanto no devolverá el expediente físico al juzgado de origen.

5.2. COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el auto mediante el cual se niega el decreto o la práctica de una prueba es pasible del recurso de apelación, siendo competente en segunda instancia el Tribunal para desatar el mismo. La norma en comento señala lo siguiente:

² Ver CD de audiencia inicial (fl. 16) Intervención del Min: 0:24:57 al 0:26:36.

³ Ver CD de audiencia inicial (fl. 16) Intervención del Min: 0:35:03 al

“Art. 243.- Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

(...)

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.”

5.3. PROBLEMA JURÍDICO

¿La prueba que denegó el *a quo* tiene la calidad de informe técnico y debe ser decretado en los términos solicitados por el apoderado de la parte actora?

5.4. TESIS DEL DESPACHO

El Despacho confirmará la decisión de primera instancia, toda vez, que el cuestionario que el abogado del caso pretende que resuelvan el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y la Secretaría de Salud Departamental Municipal no es un informe técnico.

5.5. CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 320⁴ del C.G.P, aplicable por remisión del artículo 306⁵ del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

A su turno, el artículo 328 *ibídem* dispone entre otros aspectos que: *“el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”*.

Del tenor literal de la norma en cita, concluye el Despacho que la voluntad del legislador es que, en virtud del recurso de apelación el superior estudie y revise la decisión proferida por el *a quo*, pero con una característica especial, y es que dicha instancia se limita a aquellos precisos cargos expuestos por el recurrente al sustentar su inconformidad, los cuales, se encuentran limitados, en virtud de la congruencia, a lo decidido por el juez en primera instancia.

Aclarado lo anterior, en el presente caso el apoderado judicial de la parte demandante solicito ordenar al Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, y las Secretarías de Salud Departamental y Municipal de Cali que respondan las siguientes preguntas:

- ¿Por qué el INPEC mantuvo al recluso en el Centro Carcelario Villa Hermosa de Cali en condiciones deplorables y en una celda donde no tenía que dormir en el suelo?
- ¿Por qué no se le dio al recluso un tratamiento de salud adecuado y especializado acorde a la enfermedad asmática que padecía?

⁴ Artículo 320. Fines de la apelación.

El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.

⁵ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

- ¿Por qué no se le brindo y sometió a terapias respiratorias continuas durante su estancia en dicho centro carcelario, ni lo sometió a un control permanente con neumólogo, ni mucho menos le suministro medicamentos distintos al pos?
- ¿Por qué no lo mantuvo en una celda o lugar en condiciones de salubridad adecuada para su salubridad?
- ¿Por qué omitió brindarle un servicio de salud adecuado, oportuno y diligente para tratar su enfermedad?
- ¿Por qué no adopto o tomó las medidas de salubridad necesarias para evitar que se contagiara de infecciones?
- ¿Por qué no tomó o adopto medidas de trasladar al recluso a otro centro carcelario donde le fuera tratado en mejores condiciones su enfermedad o entregarle el beneficio de la prisión domiciliaria?

El numeral 10 del artículo 180 del CPACA, dispone: “***Solo se decretarán las pruebas pedidas por las partes y los terceros, siempre y cuando sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuales exista disconformidad, en tanto no esté prohibida su demostración por confesión o las de oficio que el Juez o Magistrado Ponente considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad.***” (Se resalta.)

A su turno, el Código General del Proceso, aplicable por remisión del CPACA, impone:

ARTÍCULO 168. RECHAZO DE PLANO. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.

...

ARTÍCULO 226. PROCEDENCIA. La **prueba pericial** es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.

Sobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito.

No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la costumbre extranjera. Sin embargo, las partes podrán asesorarse de abogados, cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas.

El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito.

Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones (...)

ARTÍCULO 229. DISPOSICIONES DEL JUEZ RESPECTO DE LA PRUEBA PERICIAL. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá disponer lo siguiente:

1. Adoptar las medidas para facilitar la actividad del perito designado por la parte que lo solicite y ordenar a la otra parte prestar la colaboración para la práctica del dictamen, previniéndola sobre las consecuencias de su renuencia.

2. Cuando el juez decrete la prueba de oficio o a petición de amparado por pobre, para designar el perito deberá acudir, preferiblemente, **a instituciones especializadas públicas o privadas de reconocida trayectoria e idoneidad.**

(...)

ARTÍCULO 234. PERITACIONES DE ENTIDADES Y DEPENDENCIAS OFICIALES. Los jueces podrán solicitar, de oficio o a petición de parte los servicios de entidades y dependencias oficiales para peritaciones **que versen sobre materias propias de la actividad de aquellas.** Con tal fin las decretará y ordenará librar el oficio respectivo para que el director de las mismas designe el funcionario o los funcionarios que deben rendir el dictamen.

La contradicción de tales dictámenes se someterá a las reglas establecidas en este capítulo.

El dinero para transporte, viáticos u otros gastos necesarios para la práctica de la prueba deberá ser suministrado a la entidad dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que el respectivo director o el juez haya señalado el monto. Cuando el director informe al juez que no fue aportada la suma señalada, se prescindirá de la prueba.

PARÁGRAFO. En los procesos donde hubiere controversias sobre las liquidaciones de créditos de vivienda individual a largo plazo, deberá solicitarse a la Superintendencia Financiera de Colombia que mediante peritación realice la liquidación de los mismos. De igual manera, emitirá concepto en el que se determine si las reliquidaciones de los mencionados créditos fueron realizadas correctamente por los establecimientos de crédito y, cuando hubiera lugar a ello, efectuar la reliquidación.

(...)

ARTÍCULO 275. **PRUEBA POR INFORME. PROCEDENCIA.** A petición de parte o de oficio el juez podrá solicitar informes a entidades públicas o privadas, o a sus representantes, o a cualquier persona sobre hechos, actuaciones, cifras o demás datos que resulten de los archivos o registros de quien rinde el informe, salvo los casos de reserva legal. Tales informes se entenderán rendidos bajo la gravedad del juramento por el representante, funcionario o persona responsable del mismo.

Las partes o sus apoderados, unilateralmente o de común acuerdo, pueden solicitar ante cualquier entidad pública o privada copias de documentos, informes o actuaciones administrativas o jurisdiccionales, no sujetas a reserva legal, expresando que tienen como objeto servir de prueba en un proceso judicial en curso, o por iniciarse.

Partiendo de lo expuesto, es preciso indicar que, tal como lo dedujo la *a quo*, la solicitud probatoria del abogado demandante es inconducente, toda vez que las entidades a quienes pide contestar un cuestionario no cuentan en sus archivos con datos que les permitan emitir informes sobre los hechos que se les plantea, por tanto, no se trata de una prueba por informe.

Además, si lo que buscaba era que un experto emitiera un concepto sobre la atención médica prodigada, la prueba conducente era la pericial, pero para el efecto así debió pedirla, con el fin que se ordenara a instituciones especializadas públicas o privadas peritaciones que versen sobre materias propias de la actividad de aquellas.

Nótese que ni el Ministerio, ni la Superintendencia ni las Secretarías de Salud son expertos en la prestación de servicios médicos, por tanto, no pueden rendir dictamen sobre aspectos propios de la actividad médica o la prestación de servicios de salud.

Finalmente, en cuando a la actuación administrativa del INPEC a raíz de la atención médica que según la demanda se debía prestar a una persona privada de la libertad, tales entidades no poseen conocimientos expertos para dictaminar sobre hechos, y sobre los puntos de derecho no cabe el dictamen pericial.

Estas razones son suficientes para confirmar la decisión de negar el decreto de la prueba solicitada.

En mérito de lo expuesto, el Despacho 11 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto interlocutorio nro. 500 del 19 de junio de 2019 proferido por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Cali, que negó el decreto y practica del informe técnico solicitado por la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 2017-00332-01
: REPARACIÓN DIRECTA
: DORIS STELLA GONZÁLEZ
: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC



6

SEGUNDO: EN FIRME LA PRESENTE DECISIÓN SE REMITIRÁ EL EXPEDIENTE DIGITAL AL JUZGADO DE ORIGEN, PARA LO DE SU CARGO.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES
Magistrada